



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA – NO PROCEDE ACLARACIÓN

ACCIONANTE: PAOLA ANDREA GARZÓN MARTÍNEZ

ACCIONADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

RADICADO: 05001 31 05 023 2023 00181 01

ACTA: N° 059

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por las magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**, **LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a resolver la solicitud de aclaración presentada por la accionante en razón de la providencia emitida el pasado 12 de julio de 2023.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 059** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado como sigue:

1. ANTECEDENTES y SOLICITUD DE ACLARACIÓN

La señora **PAOLA ANDREA GARZÓN MARTÍNEZ** invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la reparación y petición, solicitando se ordene a la entidad responder de fondo petición radicada el pasado 8 de mayo en la que solicita se fije una fecha cierta en la que se materialice la entrega de la indemnización administrativa reconocida mediante la Resolución 04102019-885859 del 25 de noviembre de 2020.

El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín profirió decisión el **08 de junio de 2023** con la cual decidió **DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado** y con decisión del **12 de julio** esta Sala de Decisión decidió revocarla para **TUTELAR** el derecho de petición **ORDENANDO** que en el **año 2023** la UARIV sin evasivas o dilaciones aplique a la señora **PAOLA ANDREA GARZÓN MARTÍNEZ** el “Método Técnico

RADICADO: 05001 31 05 023 2023 00181 01

de Priorización" y le comunique el resultado de dicha ponderación así como la posición en que se ubica dentro de la lista ordinal general conforme al puntaje obtenido, para que pueda hacer un seguimiento sobre cómo se establecen los turnos de pago de indemnización administrativa con base en el presupuesto asignado a la UARIV para la vigencia fiscal en la respectiva anualidad.

La accionante solicita ACLARAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutive¹ con el fin de que se **ORDENE** a la Dirección Técnica de Reparación de la UARIV que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, le informe el plazo razonable o aproximado y el orden en el que se accederá o se materializará la medida de indemnización que le fue reconocida con la Resolución Nro. 04102019-885859 del 25 de noviembre de 2020. Sustenta su petición de señalando lo siguiente:

"2- No obstante, de manera respetuosa debo indicar que su honorable despacho no tuvo en cuenta que efectivamente quedó demostrado las evasivas y dilaciones injustificadas por parte de la UARIV, en el sentido de que desde hace casi **tres (03) años** ha respondido mediante comunicados que el MTP "se realizaría para la vigencia siguiente".

3- Que, como titular de los derechos fundamentales reclamados soy sujeto cobijado por una protección especial dada mi situación particular de debilidad manifiesta, como lo es la población desplazada, según la recurrente jurisprudencia constitucional.

4- Es evidente que la problemática expuesta gravita en torno al derecho fundamental de petición, garantía que otorga el derecho a obtener una respuesta oportuna, clara, completa, de fondo y congruente en relación con lo pedido, es decir que con relación al tiempo en la orden impartida en la parte resolutive del fallo "en el año 2023"; Considero de manera muy respetuosa, resulta incierta, teniendo en cuenta que la garantía constitucional como se dijo es la de petición.

5- La Corte Constitucional a partir del análisis del contenido del artículo 23 de la Constitución, reiteradamente, ha fijado las reglas que deben tener en cuenta los operadores jurídicos al aplicar esta garantía fundamental, así: "(...) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6 del Código Contencioso Administrativo que señala **15 días para resolver** (...)".

6 - Es claro entonces que persiste la vulneración del derecho invocado, pues, aunque no sea posible ordenar una fecha cierta para la entrega de la indemnización administrativa, lo cierto es que cuando resulta procedente la reparación deprecada la UARIV debe comunicar el plazo de que dispone para

¹ Segunda Instancia - Archivo "05"

RADICADO: 05001 31 05 023 2023 00181 01

hacer efectivo el pago de la misma, de conformidad con lo ordenado por la honorable corte constitucional en Auto 206 del 28 de abril de 2017, mediante el cual indicó: "(...) en el evento que nosea priorizado, los términos bajo los cuales se accederá a la medida, esto es el plazo aproximado y el orden en el que accederá a esos recursos (...)".

7- Es importante aclarar también que según la recurrente jurisprudencia constitucional, el derecho a un plazo razonable es un mandato fundamental de índole convencional y constitucional, constituido por cuatro elementos y de obligatorio cumplimiento para los Estados partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; derecho que tiene como objeto que los procesos judiciales y procedimientos administrativos se desarrollen con la diligencia necesaria para que las víctimas o involucrados no vean afectados sus derechos por demoras excesivas y falta de garantías que les permita obtener una solución oportuna del caso.

8- Es claro entonces que persiste la vulneración del derecho invocado, pues, **aunque no sea posible ordenar una fecha cierta para la entrega de la indemnización administrativa**, lo cierto es que cuando resulta procedente la reparación deprecada la UARIV debe comunicar el plazo razonable de que dispone para hacer efectivo el pago de la misma (...)"

Pues bien, debe tener presente la accionante que de acuerdo con lo previsto en el **artículo 285 del CGP**, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció y **solo podrá ser aclarada cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda**, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.

Así, se advierte la improcedencia de lo solicitado por las siguientes razones:

En la impugnación se insistió en que se ordenara a la entidad emitir respuesta de fondo a la petición del 08 de mayo de 2023 en la que se solicitó indicar fecha cierta en la que se materializará la entrega de la reparación administrativa que le fue otorgada y esta corporación a partir del análisis del acervo probatorio, presentó las razones por las que no resulta ordenar a la entidad que defina una fecha exacta para el pago de la reparación administrativa que le fue reconocida como compañera del señor YEISON ALEJANDRO LAVERDE LLANO con la Resolución No 04102019-885859 del 25 de noviembre de 2020.

Se explicó que de acuerdo con el precedente constitucional sobre la materia, la respuesta de fondo a lo solicitado no implica que se otorgue lo pedido por el interesado en los términos de la sentencia C-510 de 2004 pues en el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a

RADICADO: 05001 31 05 023 2023 00181 01

tener una contestación para la misma, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal.²

Así, se encontró que en la respuesta emitida el pasado 08 de mayo de 2023 por la UARIV es inteligible y contiene argumentos de fácil comprensión; es precisa y congruente pues abarca la materia objeto de la petición, y es claramente consecuente con el trámite que se ha surtido relacionado con la indemnización administrativa que le fue reconocida mediante la Resolución No No 04102019-885859 del 25 de noviembre de 2020 dando una respuesta de fondo a la solicitud de la señora PAOLA ANDREA GARZÓN MARTÍNEZ.

Se verificó además, que al no haber acreditado ante la entidad criterios para ser clasificada en solicitud prioritaria, en el caso de la señora GARZÓN MARTÍNEZ el pago de la indemnización reconocida se sujetará a lo dispuesto en los artículos 11, 14 y 15 de la Resolución 1049 de 2019, así como a la disponibilidad presupuestal de la entidad en cada año de vigencia fiscal tal, el cual se realizará anualmente, a la luz de lo consagrado en el anexo de la referida resolución, por lo que no puede ordenarse a través de este trámite constitucional la asignación de turno o fecha para pago de la indemnización reconocida. Decidir de otro modo implicaría el desconocimiento del trámite administrativo para asignación de turnos, así como de los previamente asignados.

Sin embargo, encontró la Sala procedente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad, (art. 4 del CPCA.), a fin de evitar perjuicios a la accionante y prevenir afectación a de sus derechos fundamentales, ordenar que en el año 2023 la UARIV sin evasivas o dilaciones aplique el Método Técnico de Priorización y le comunique el resultado de dicha ponderación, así como la posición en que se ubica dentro de la lista ordinal general conforme al puntaje obtenido, para que pueda hacer un seguimiento sobre cómo se establecen los turnos de pago de indemnización administrativa con base en el presupuesto asignado a la UARIV para la vigencia fiscal en la respectiva anualidad.

² T-376/17.

RADICADO: 05001 31 05 023 2023 00181 01

No se observa entonces que la providencia emitida por esta corporación **contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda** en la parte motiva, ni mucho menos en la resolutive en la que se ordenó:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juez Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín y **TUTELAR** el derecho de petición invocado por la señora **PAOLA ANDREA GARZÓN MARTÍNEZ** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, según lo dispuesto en la presente providencia.

SEGUNDO: ORDENAR que en el **año 2023** la UARIV sin evasivas o dilaciones aplique a la señora **PAOLA ANDREA GARZÓN MARTÍNEZ** el "Método Técnico de Priorización" y le comunique el resultado de dicha ponderación, así como la posición en que se ubica dentro de la lista ordinal general conforme al puntaje obtenido, para que pueda hacer un seguimiento sobre cómo se establecen los turnos de pago de indemnización administrativa con base en el presupuesto asignado a la UARIV para la vigencia fiscal en la respectiva anualidad.

Lo que se advierte es que lo ahora pretende la accionante con su solicitud es que se modifiquen las órdenes impuestas, pero la Sala carece de competencia para ello, pues debe tener presente la accionante que de acuerdo con lo previsto en el **artículo 285 del CGP**, a esta Sala le está vedado reformar la sentencia proferida el pasado 12 de julio de 2023; y tal como como ha quedado visto, no contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en la parte motiva ni en la resolutive.

2. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley **DECIDE**:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de **ACLARACIÓN** de la sentencia proferida por esta Sala de Decisión el **12 de julio de 2023** presentada por la señora **PAOLA ANDREA GARZÓN MARTÍNEZ**.


SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta providencia por el medio más expedito y eficaz a las partes y una vez ejecutoriada la providencia **ENVÍESE** el presente expediente ala H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

RADICADO: 05001 31 05 023 2023 00181 01

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma en constancia por quiénes en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Las Magistradas,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó
por **estados N ° 130** del **31** de **JULIO** de
2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>